

Las selvas de México se están convirtiendo, con los riesgos ecológicos que esto conlleva, en escenarios de la disputa por la Nación. Los Chimalapas y la Lacandona, reductos de la biodiversidad del planeta y espacios vitales de algunos de los pueblos indios del Sureste de México, son codiciados por transnacionales ávidas de ganancias mediante la transformación de las selvas (y de tantas otras cosas) en modernos supermercados, con laboratorios de experimentación genética, cuando no son destruidas como efecto de la especulación inmobiliaria o de la contaminación petrolera.

Tanto la selva Lacandona como los Chimalapas son patrimonio de la nación, que no sólo no es idéntica al estado sino que últimamente se distancia cada vez más. La posición geográfica del cinturón en el que se ubican estas dos selvas, y que se extiende, aunque azarosamente, hasta el Amazonas, es sin duda también base del interés del gobierno de Estados Unidos en la región, que representa no sólo un banco de riquezas prioritarias para el mantenimiento de su hegemonía en el mundo sino un punto de enlace entre flujos naturales de los cinco continentes y el norte y sur del planeta y un potencial espacio de encuentro y control mundial de mercancías y productos.

Sin embargo, las incursiones militares ocurridas desde junio no parecen atender, por lo menos en lo inmediato, a una ocupación del territorio con fines económicos. Incluso resultan dañinos y contraproducentes en más de un sentido. Más bien parece haber un propósito de aniquilamiento drástico de la disidencia y de recuperación de los mecanismos y espacios de ejercicio del poder de estado, aunque, tratándose de un estado que transita aceleradamente hacia la ilegitimidad total, como dijera hace ya buen tiempo Nicos Poulantzas, requiere para ello del uso generalizado de la fuerza y de los aparatos represivos diversos.

La militarización de la vida cotidiana y de todas las esferas de la vida pública se extiende como muestra de la incapacidad política del estado. El repudio a su proyecto económico (que incrementó el número de pobres a 73 millones) y el descrédito de sus instituciones políticas y judiciales, también generalizado, no podrá ser revertido con el aumento de la presencia militar. Al contrario, esta presencia refuerza la convicción de que éste es el mundo que no queremos y la urgencia, en consecuencia, por construir una resistencia amplia al proyecto privatizador del territorio, la economía, la educación, la justicia y la política, una resistencia contra la exclusión y por la conquista de un futuro digno, y con la participación de todos.

Para citar la versión impresa de este documento:

Presentación, *Chiapas*, núm. 8, México: IIEc, UNAM-Ediciones ERA, 1999, p. 5-6. ISBN: 968-411-465-6.